

Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó el de nulidad que dedujo respecto de la de instancia que acogió parcialmente la demanda al rechazar la aplicación de la nulidad del despido y al pago de cotizaciones previsionales del actor.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, de su artículo 483-A, se desprende que esta Corte debe controlar en la admisibilidad, su oportunidad, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones a que se ha hecho referencia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del arbitrio.

Tercero: Que, según se expresa en el recurso, la materia de derecho que se propone para efectos de su unificación, consiste en el “...aplicación del artículo 162 del Código del Trabajo para el caso de marras...también se ha de centrar la discusión en torno al pago de cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía...”

Cuarto: Que para justificar la existencia de distintas interpretaciones respecto de la materia que se pide unificar, la recurrente alega que la sentencia que impugna ha señalado que acreditado que durante la vigencia de la relación laboral no se enteraron las cotizaciones de seguridad social y salud del trabajador y no constando en autos su posterior solución, corresponde imponer la sanción que contempla el artículo 162 del Código del Trabajo, lo que resulta contradictorio con lo resuelto por esta Corte en los Roles N° 7.937-2017, 15.530-2017 y 31.965-2017, que, en síntesis, resuelven que el aludido reproche ha sido previsto para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente de las remuneraciones del dependiente y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y ha distraído dineros que no le pertenecen en finalidades distintas a aquéllas para las cuales fueron retenidos.



Quinto: Que las sentencias reseñadas en el considerando precedente dan cuenta que, por un lado, en algún momento existieron distintas interpretaciones respecto de la materia indicada, esto es, el pago de las cotizaciones descritas, la que se encuentra unificada con un criterio asentado, expresado desde las sentencias Roles N° 8.318-2014, 5.376-2018, 1.864-2019 y más recientemente en la N° 29.309-2019, entre muchas otras, sosteniéndose sin variación que *“la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto con el aporte al seguro de cesantía, dentro del plazo que fija la ley”*.

Y, por otra parte, en relación a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, las sentencias indicadas en el considerando anterior dan cuenta que, en algún momento existieron distintas interpretaciones respecto de la materia indicada, la que se encuentra unificada desde hace algún tiempo por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N° 40.253-2017, sosteniéndose sin variación que no corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido a los órganos de la administración, porque en estos casos se trata de contratos a honorarios que, al menos en su origen, fueron acordados al amparo de un estatuto que les otorgaba una presunción de legalidad y la sanción pretendida se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado carecen de la capacidad de convalidar libremente el despido, por requerir un dictamen condenatorio previo, particularidad que los grave en forma desigual, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional y desproporcionada.

De esta manera, no aparece que el tema cuya línea jurisprudencial se procura unificar requiera de la aplicación del mecanismo unificador que importa el arbitrio intentado.

Sexto: Que, por lo anteriormente expuesto, debe concluirse que la necesidad de uniformar de la materia de derecho propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierten concurrentes en este caso.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible**, el recurso interpuesto contra la sentencia de quince de marzo de dos mil veinticuatro.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 13.945-2024.-





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Jean Pierre Matus A., Maria Gajardo H., Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada M. y los Abogados (as) Integrantes Pía Verena Tavorari G., Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

